

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-5980-2020
CARATULADO : LINARES/FISCO DE CHILE

Santiago, dieciséis de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

Con fecha 09 de abril de 2020, folio 1, comparece don César Antonio Barra Rozas, abogado, en representación convencional de don **Nelson Manuel Linares Macías**, técnico administrativo, ambos domiciliados en calle Blanco N° 1623, oficina 1602, comuna de Valparaíso y Avenida Santa Rosa N° 170, oficina 607, comuna de Santiago, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del **Fisco de Chile**, representado por la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Con fecha 02 de octubre de 2020, folio 12, se notificó la demanda y su proveído conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil, a la demandada de autos mediante su representante legal.

Con fecha 21 de octubre de 2020, folio 14, la demandada contestó la demanda deducida en su contra.

Con fecha 26 de octubre de 2020, folio 18, la demandante evacuó el trámite de la réplica

Con fecha 05 de noviembre de 2020, folio 20, la demandada evacuó el trámite de la dúplica.

Con fecha 09 de noviembre de 2020, folio 21, se recibió la causa a prueba, notificándose a la parte demandante expresamente por resolución de fecha 12 de abril de 2021, a folio 27, y a la parte demandada, con fecha 23 de junio de 2021, a folio 30, y fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados.

Con fecha 31 de diciembre de 2021, folio 32, se tuvo por reactivado el término probatorio.

Con fecha 10 de junio de 2022, folio 40, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 09 de abril de 2020, comparece don César Antonio Barra Rozas, en representación convencional de don Nelson Manuel Linares Macías, quien viene en deducir demanda de indemnización de perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por la Presidenta del Consejo de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NVECZXQBEZ

Defensa del Estado, doña María Eugenia Manaud Tapia, todos ya individualizados, por las razones de hecho y fundamentos de derecho que exponen.

Relata que don Nelson Manuel Linares Macías, militante del Movimiento Popular Unitario Mapu Obrero Campesino, casado con doña Isabel Margarita Montes Olivares, con quien tiene un hijo de 20 años de edad, el día 26 de septiembre de 1973, a las 18.00 horas, cuando se encontraba en la residencia de su padre en la Población Cemento Melón N° 27, de la comuna La Calera, fue detenido por la Policía de Investigaciones de Chile, en un vehículo de la empresa Cemento Melón, sin ser golpeado o la casa allanada.

Señala que al interior de la camioneta se encontró con Jaime Escobar Canales, chofer del vehículo que su hermano arrendaba a la Corporación de la Vivienda de Valparaíso, quien no era militante de algún partido, siendo trasladados a la Subcomisaría de Carabineros de La Calera, y encontrándose en el calabozo con Jean Eduardo Rojas Arce, amigo y vecino desde niños, a quien golpearon mucho y apuntaron en un simulacro muy real, por lo que sintió mucho miedo y dolor.

Agrega que al otro día a las 10.00 am, lo sacaron del calabozo junto a Jaime, y los trasladaron a Investigaciones de Valparaíso, donde les toman declaraciones por separado respecto a un levantamiento de la marina ocurrido el día 06 de septiembre de 1973, para luego ser trasladado a la Academia de Guerra en Valparaíso, donde después de mucho tiempo de espera dijeron que no había espacio para mantenerlo ahí, por lo que fue trasladado a la Fiscalía Naval, donde permaneció mirando la pared con las manos en la nuca, recibiendo culatazo y golpes de pies y puños hasta caer al suelo, mientras le preguntaban sobre su participación en dicho levantamiento por dos largos e interminables días, encapuchado, en el suelo, sin comida, sin agua, con frío, para finalmente liberarlo en la calle.

Indica que posteriormente, el 20 de septiembre de 1973 (sic), fue citado a la Subcomisaría de Carabineros de La Calera, donde lo interrogó el teniente Shaufaser, a raíz de la fabricación de bases para bombas que se habrían fabricado en Cemento Melón, en la cual su padre era jefe de maestranzas, por lo que él tenía acceso libre y facilidades para la manipulación de maquinaria, negando todo lo que se le imputaba y trasladándolo al calabozo a la espera de su liberación, momento en que lo golpearon y le aplicaron la tortura del teléfono, cuya secuela dejó pérdida en ambos oídos y dos piezas dentales delanteras, para luego ser dejado en libertad vigilada, con firma diaria y luego semanal, durante 3 años y medio.

Explica que como consecuencia de los golpes y torturas a las que fue sometido, su representado quedó afectado psicológicamente como socialmente, ya que jamás logró obtener un trabajo remunerado, formal o con imposiciones, teniendo solo la pensión Valech para vivir, lo que es insuficiente para tener una vida digna, debiendo



seguir trabajando informalmente en mecánica y pintura de autos, a pesar de padecer de fibrosis quística. En cuanto al daño psicológico, indica aun tener pesadillas de lo vivido, además de insomnio que puede prolongarse por días.

En cuanto a los fundamentos de derecho, refiere que la responsabilidad del Estado emana de los perjuicios que provocan los órganos de la administración, de acuerdo a lo reconocido en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución Política de la República, además de la Ley N° 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado. Indica que la responsabilidad del Estado es de derecho público, de acuerdo a lo sostenido por la Excelentísima Corte Suprema en las causas “Bustos con Riquelme con Fisco de Chile”, “Albornoz con Ortiz y Fisco”, “Caro con Fisco”, y “Ortega con Fisco”, que transcribe.

Sobre la doctrina y la responsabilidad del Estado, menciona y detalla lo que abundante y buena parte de la doctrina chilena de derecho público señala acerca de la responsabilidad del Estado, a través del profesor Gustavo Fiamma Olivares, el profesor Eduardo Soto Kolss, el profesor Rolando Pantoja y el profesor Osvaldo Oelckers.

Respecto al hecho ilícito de autos como crimen de lesa humanidad, indica que con el avance del derecho internacional se reconoció un derecho obligatorio mediante la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, además de reconocer la Corte Internacional de Justicia la existencia para los Estados de obligaciones erga omnes en relación con los derechos fundamentales. En el ámbito nacional, señala que existe regulación vigente para entender cuando se está frente a un delito de lesa humanidad, tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Congreso Nacional, y la ley N° 20.357, en su título I “Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio”.

En cuanto a la imprescriptibilidad de la acción de reparación deducida, sostiene que en una serie de fallos recientes se indica con claridad la inaplicabilidad del derecho común a casos como la acción deducida, los que agrega y detalla.

Respecto al daño moral proveniente de vulneración a los derechos fundamentales, refiere que la mayoría de la jurisprudencia considera que éste consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Respecto a la prueba, se coincide en que el daño moral no la requiere, sino que basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera del daño.

En ese sentido, explica que es claro que don Nelson Manuel Linares Macías, ha padecido toda una vida, de sufrimiento y angustia por las diversas vejaciones, torturas físicas y psicológicas cometidas por agentes del Estado. Que si bien, el Estado chileno ha efectuado distintos esfuerzos una vez terminado el régimen militar, de



resarcimiento de perjuicios mediante pensiones asistenciales y simbólicas a todos aquellos que se encuentren en la situación como la de su representado, dichas reparaciones han tenido un carácter general buscando una solución uniforme, abstracta, sin considerar la situación específica y particular de cada ser humano que haya sido sujeto a apremios ilegítimos en dicho período, no configurándose lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que obliga al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

Previas citas legales, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, ya individualizada, a fin de que se le condene al pago de la suma de \$300.000.000, al demandante, más intereses y reajustes legales, con costas o, en subsidio, condenar al demandado al pago de la suma de dinero que se estime en justicia y equidad, debidamente reajustadas y con intereses que se estimen procedentes, con costa;

SEGUNDO: Que, con fecha 21 de octubre de 2020, la parte demandada contesta la acción deducida en su contra, a través del señor Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, doña Ruth Israel López, solicitando el rechazo de la misma, en base a los siguientes argumentos.

En primer lugar, deduce la excepción de reparación integral - improcedencia de la indemnización solicitada por haber sido ya indemnizado el demandante, defensa que opone, atendidas las reparaciones ya otorgadas a las víctimas y a los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, haciendo presente al efecto que la Ley N° 19.123, así como otras normas jurídicas conexas, en su conjunto han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado la compensación a tales víctimas y familiares, estableciéndose al efecto los siguientes mecanismos: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Que, en cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, sostiene que en término de costos generales para el Estado de Chile, dicho tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2015, las siguientes sumas de dinero: a) Pensiones: La suma de \$199.772.927.770, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123; b) Pensiones: La suma de \$419.831.652.606, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992; c) Bonos: La suma de \$41.856.379.416, asignada por la ley 19.980, más la suma de \$22.205.934.047, por la ley N° 19.992; c) Desahucio (Bono Compensatorio): la suma de \$1.464.702.888, asignada por la ley N° 19.123; y d) Bono Extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$21.256.000.000.



En síntesis, a diciembre de 2015, el Fisco de Chile ha desembolsado un total de \$706.387.596.727.

En la especie, indica que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las Leyes N° 19.234 y 19.992, y sus respectivas modificaciones, leyes que establecieron una pensión anual reajutable de \$1.353.798, para beneficiarios menores de 70 años; la suma de \$1.480.284, para beneficiarios de 70 o más años de edad, y la cantidad de \$1.549.422, para mayores de 75 años de edad. Adicionalmente a los montos antes referidos, el demandante recibió en forma reciente el aporte único de reparación contemplado por la Ley N° 20.874, por la suma de \$1.000.000.

Luego y en cuanto a las reparaciones mediante asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que se concedió a los beneficiarios de la Ley N° 19.234, como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais), ofreciéndose asimismo el apoyo técnico y de rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura.

Adicionalmente, se incluyeron entre dichos beneficios, aquellos de carácter educacional, consistentes en la continuidad y gratuidad de los estudios básicos, medios y superiores, ello a cargo de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, además de haberse concedido beneficios en vivienda.

Finalmente, y en lo relativo a las reparaciones simbólicas, destaca la ejecución de diversas obras, como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido; c) La reconstrucción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; d) El establecimiento, mediante la Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país; entre otros.

Sostiene que de todo lo expresado se puede concluir que los esfuerzos del Estado de Chile, por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, incluyendo al demandante, no sólo han cumplido con todos los estándares internacionales de justicia transicional, sino que se han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera, las que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de tales violaciones.

En efecto, indica que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo



de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado, por concepto de pensiones, beneficios y prestaciones públicas.

Estando entonces la acción deducida en autos basada en los mismos hechos y pretendiéndose indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, así como el tenor de los documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad, se opone la excepción de reparación integral, por haber sido ya indemnizados el demandante.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción extintiva de la acción invocada en la demanda, toda vez que de acuerdo al relato del actor los hechos ocurrieron en fechas indeterminados de septiembre de 1973, en circunstancias que la demanda de autos fue notificada a su parte sólo con fecha 02 de octubre de 2020, habiendo transcurrido con creces el plazo de prescripción establecido en el artículo 2332 del Código Civil, aun si se entiende suspendido el referido plazo legal durante todo el período de la Dictadura Militar.

En subsidio y, para el caso de estimarse que el artículo 2332 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, alega la prescripción extintiva ordinaria de acciones y derechos de cinco años, que previenen los artículos 2514 y 2515, por cuanto entre la fecha en que se habrían hecho exigibles los supuestos derechos a indemnización, a la fecha de notificación de la demanda, habría transcurrido en exceso dicho plazo legal.

Previo análisis de jurisprudencia sobre la prescripción, agrega que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no hay tratados que establezcan la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de los crímenes denominados como de lesa humanidad. Al respecto, cita La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; La Convención Americana de Derechos Humanos; y el Convenio de Ginebra sobre Tratamientos de los Prisioneros de Guerra, entre otros.

Concluye que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de Derecho Internacional de Derechos Humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En tercer lugar, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas y, en subsidio, de las defensas y excepciones planteadas precedentemente, solicita que la suma de \$300.000.000 se rechace, por cuanto la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima



un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. En tal sentido, hay que regular el monto de la indemnización como un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Enfatiza que tampoco resulta procedente acudir a la capacidad económica de la demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, y que el daño moral debe ser legalmente acreditado en el juicio con arreglo a la ley, por lo que la extensión de cada daño y el monto de la indemnización pretendida deberá ser justificada íntegramente.

En cuarto lugar, en subsidio de las excepciones precedentes, alega que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, pues su finalidad fue precisamente reparar el daño moral, agregando que de no accederse a dicha petición subsidiaria, implicaría una doble indemnización por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Finalmente, hace presente la improcedencia de los reajustes e intereses del modo en que han sido solicitados por el demandante en su libelo, esto es, desde la notificación de la demanda, por cuanto mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en autos, no existe ninguna obligación para la demandada, no existiendo por ende ninguna suma de dinero que deba ser reajustada, mientras que tratándose de los intereses demandados, explica que el artículo 1551 del Código Civil, establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y se haya retardado el cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, solicita al Tribunal tener por contestada la demanda de autos, y con su mérito, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dicha acción indemnizatoria en todas sus partes, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido y conceder el pago de reajustes e intereses sólo desde el cúmplase de la sentencia firme y ejecutoriada, y se incurra en mora respectivamente, eximiendo a su parte del pago de costas, por tener motivo plausible para litigar;

TERCERO: Que, con fecha 26 de octubre de 2020, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica.

En cuanto a las excepciones de reparación integral y de prescripción extintiva formuladas por la contraria, analiza y transcribe un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia nacional;



CUARTO: Que, con fecha 05 de noviembre de 2020, la demandada evacuó el trámite de la dúplica, reiterando las excepciones, alegaciones y defensas opuestas en el escrito de contestación de la demanda;

QUINTO: Que, con fecha 09 de noviembre de 2020, se recibió la causa a prueba, notificando a la parte demandante expresamente por resolución de fecha 12 de abril de 2021, y a la parte demandada con fecha 23 de junio de 2021, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los allí señalados.

Luego, con fecha 31 de diciembre de 2021, folio 32, se tuvo por reactivado el término probatorio atendido lo dispuesto por la Ley N° 21.226;

SEXTO: Que, a fin de acreditar los fundamentos de su acción, la parte demandante rindió prueba instrumental, consistente, en lo pertinente, en:

1.- Copia de escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2018, del Notario Público de Valparaíso don Juan Andrés Riveros Donoso, Repertorio N° 1.427-2018, mandato judicial de Gustavo del Transito Maraboli Labra y otros a Lagos y Compañía, Estudio Jurídico Limitada y otros;

2.- Copia de cédula de identidad de don César Antonio Barra Rozas;

3.- Copia de sentencia de 29 de noviembre de 2018, caso Órdenes Guerra y Otros vs Chile, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;

4.- Copia de protocolización ante el Notario Público de Valparaíso don Gabriel Alfonso Ferrand Miranda, Repertorio N° 1536/2021, del informe psicológico emitido por la psicóloga María Verónica Dávila León de Nelson Manuel Linares Macías;

5.- Copia de informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura;

6.- Copia de sentencia de fecha 20 de septiembre de 2018, causa Rol N° 16.914-2018 de la Excma. Corte Suprema;

7.- Copia de sentencia de fecha 20 de septiembre de 2018, causa Rol N° 17.010-2018 de la Excma. Corte Suprema;

8.- Copia de sentencia de fecha 24 de octubre de 2019, causa Rol N° 17.710-2019 de la Excma. Corte Suprema;

9.- Copia de sentencia de fecha 24 de diciembre de 2018, causa Rol N° 29.454-2018 de la Excma. Corte Suprema;

10.- Copia de documento denominado “Consecuencias sobre la salud en familiares de ejecutados políticos”, emitido por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas;

11.- Copia de “Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos



cometidas durante la dictadura militar”, de fecha 23 de septiembre de 2016, emitido por el Servicio de Salud Metropolitana Prais;

12.- Copia de documento denominado “Situaciones represivas y experiencias traumáticas”, de agosto de 2016, emitido por la ONG ILAS;

SÉPTIMO: Que, por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba documental:

1.- Copia simple Resolución Tra N° 45/142/2017, emitida por el Consejo de Defensa del Estado, con fecha 30 de agosto de 2017, relativa al nombramiento de doña Ernestina Ruth Israel López, en calidad de abogado Procurado Fiscal de Santiago;

OCTAVO: Que, el tribunal, a solicitud de la parte demandada ordenó la siguiente diligencia probatoria:

1.- Copia de Ord. DSGT N° 4792-252, de fecha 08 de enero de 2021, emitido Instituto de Previsión Social, Departamento Gestión de Beneficios, Unidad Valech, Rettig y otros Beneficios Reparatorios, respecto de don Nelson Manuel Linares Macías. Dicha diligencia se encuentra cumplida y acompañada a los autos con fecha 11 de enero de 2021, a folio 224;

NOVENO: Que, son hechos de la causa, por así encontrarse acreditados en el proceso, los siguientes:

1.- Que don Nelson Manuel Linares Macías -pese a la escasa prueba rendida-, de acuerdo a su relato y oficio de folio 22, fue detenido el 26 de septiembre de 1973, alrededor de las 18 horas, en casa de su padre, siendo trasladado a la Subcomisaría de La Calera, luego a Investigaciones de Valparaíso y a la Fiscalía Naval, permaneciendo detenido hasta el día siguiente, donde fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes. No constan las secuelas referidas, a falta de mayores antecedentes, tales como pérdida de audición y de piezas dentales;

2.- Que, a don Nelson Manuel Linares Macías, las experiencias vividas le han producido estrés post traumático, reviviendo emociones intensas de miedo, depresión, y sentimientos de soledad;

3.- Que, don Nelson Manuel Linares Macías se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, de acuerdo a oficio solicitado por la demandada;

4.- Que, don Nelson Manuel Linares Macías, ha obtenido los siguientes beneficios de reparación contemplados en: Ley N° 19.992, pensión por \$29.130.258; aporte único Ley 20.874, por \$1.000.000; y aguinaldos por \$518.325, lo que da un



total pagado de \$30.648.583, siendo la pensión actual de \$213.208, lo anterior, a la fecha de emisión del oficio respectivo, el 08 de enero de 2021;

DÉCIMO: Que, como se adelantó, en estos autos se ha deducido acción de indemnización de perjuicios por don Nelson Manuel Linares Macías, en contra del Fisco de Chile, en atención al daño sufrido producto de su detención y tortura en manos de agentes del Estado, quien fuera reconocido como víctima de violación a los Derechos Humanos, por la denominada Comisión Valech, solicitando una indemnización ascendente a \$300.000.000 por concepto de daño moral o lo que el Tribunal estime pertinente.

Que, por su parte, el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo, en base a diversos argumentos, oponiendo excepción de reparación integral, por cuanto la actora ha sido reparada mediante desagravios de carácter simbólico y en programas; y haber operado la prescripción de la acción, tanto de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil como de 5 años del artículo 2515 del mismo cuerpo de leyes. En subsidio, para el caso de acogerse la presente acción, solicita que el daño sea regulado teniendo en consideración los beneficios extrapatrimoniales ya recibidos del Estado;

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la denominada “excepción de reparación integral” que opone la demandada, por haber sido resarcido el actor en conformidad a la Ley N° 19.992 y N° 20.874, cabe señalar que si bien consta en Ordinario N° 4792-252, de 08 de febrero de 2021, del Instituto de Previsión Social, que don Nelson Manuel Linares Macías ha recibido beneficios por un total de \$30.648.583 a la fecha -sin perjuicio de la pensión mensual que sigue percibiendo, ascendente a \$213.208-, lo cierto es que tales beneficios no son incompatibles con las indemnizaciones que por esta vía se solicitan, como ya ha sido establecido reiteradamente por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia.

Por otra parte, las reparaciones de carácter simbólico a las que hace referencia la demandada, no resultan en modo alguno incompatibles con una eventual indemnización de perjuicios -de considerarse que concurren los requisitos para ello-, más aún si la propia ley no establece dicha incompatibilidad para la reparación monetaria, de acuerdo al artículo 24 de la citada ley, que dispone: “La pensión de reparación será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario. Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes”. De este modo, no siendo incompatible una reparación de carácter monetario con una indemnización de perjuicios, con mayor razón resulta compatible -a juicio de esta Magistrado- con una reparación meramente simbólica;



DUODÉCIMO: Que, por otra parte, la demandada alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las codificaciones civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino



que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo Rol ICS 5831-2013).

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada;

DÉCIMO TERCERO: Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a la pretensión de actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, como ya se adelantó, en el motivo noveno precedente, es un hecho de la causa que el demandante fue detenido y trasladado a diversos centros de reclusión, permaneciendo por un día, siendo torturado y sometido a apremios ilegítimos, para luego ser dejado en libertad, encontrándose calificado como víctima del listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valech, ello de acuerdo a la prueba rendida en autos, apreciada en forma legal.

Que, luego, tal como se detalló en el motivo noveno, lo que se ve corroborado con documento denominado informe pericial psicológico, el actor padece estrés post traumático.

Que, estos hechos, conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención y tortura de don Nelson Manuel Linares Macías.

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Por su parte, la Constitución Política de la República de 1925, garantizaba a todos los habitantes de la República la libertad, al regular en sus artículos un estatuto de derechos de las personas, deberes de las autoridades y requisitos para proceder a la privación de ella.

En el Acta Constitucional de la Junta de Gobierno, DL N° 1 de 11 de septiembre de 1973, en su primera consideración se expone: “La fuerza Pública



formada constitucionalmente por el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Carabineros representa la organización que el Estado se ha dado para el resguardo y defensa de su integridad física y moral; y de su identidad histórico cultural...”; “... su misión suprema es la de asegurar por sobre toda otra consideración la supervivencia de dichas realidades y valores, que son los superiores y permanentes de la nacionalidad chilena.”

El artículo 4 del DL N° 5, publicado el 22 de septiembre de 1973, sanciona a quienes cometieren atentados contra la vida e integridad física de las personas, con el propósito de alterar la seguridad interna o intimidar a la población o procedan a su encierro o detención.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los Derechos Humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los Derechos Humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los Derechos Humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún Órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como el Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el Derecho Internacional Humanitario;

DÉCIMO CUARTO: Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama el actor.

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos,



consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

“El daño moral consiste en la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88);

DÉCIMO QUINTO: Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, el demandante rindió prueba documental que da cuenta, de las secuelas psicológicas y emocionales que presenta al día de hoy.

Así, consta del documento denominado informe psicológico de don Nelson Manuel Linares Macías, emitido por la profesional María Verónica Dávila León, con fecha 07 de julio de 2021, legalmente protocolizado ante el Notario Público de Valparaíso don Juan Andrés Riveros Donoso, el cual indica que el actor fue detenido en septiembre de 1973, oportunidad en que sufrió golpes y apremios ilegítimos, observándose síntomas de estrés post traumático;

DÉCIMO SEXTO: Que, si bien la privación de libertad y tortura, en el contexto que se ha reseñado, resulta difícil de calcular y cuantificar, el Tribunal lo regulará prudencialmente en la cantidad total de diez millones de pesos (\$10.000.000), reiterando lo ya referido en las motivaciones precedentes y haciendo presente que si bien la privación de libertad por motivos políticos y sin causa justificada constituye de por sí una grave violación a los Derechos Humanos, en este caso aquella se prolongó por 1 día, lo que igualmente importa un menoscabo a los Derechos Fundamentales de todo ser humano, y que se condice con las indemnizaciones fijadas por esta juez en casos análogos, debiendo tenerse presente las demás reparaciones obtenidas por el actor, que si bien no son incompatibles, no pueden obviarse;

DÉCIMO SÉPTIMO: Que al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, la suma regulada se reajustará conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor a partir de la fecha de notificación de esta sentencia y con intereses desde que la misma quede ejecutoriada;

DÉCIMO OCTAVO: Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 47, y siguientes, 222 y, 224, 236, 1437, 1700, 1706, 2492 y 2518 del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 342, 346, 384, 426, 427 y 428 del Código Civil; Constitución



«RIT»

Foja: 1

Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, se resuelve:

a) Que **se rechazan** las excepciones de reparación integral y prescripción deducidas por la demandada;

b) Que se acoge, parcialmente, la demanda de lo principal de 09 de abril de 2020 y, en consecuencia, **se condena al Fisco de Chile** a pagar a título de daño moral, la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000), a favor del demandante don Nelson Manuel Linares Macías, con más los reajustes e intereses consignados en el fundamento décimo séptimo precedente;

c) Que **se exime de pago** de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelare.

Rol N° C-5980-2020.

Pronunciada por doña **Soledad Araneda Undurraga**, Juez Titular.

Autoriza doña **Ximena del Pilar Andrade Hormazábal**, Secretaria Subrogante.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. En **Santiago, dieciséis de Junio de dos mil veintidós.-**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NVECZXQBEZ